



Susan Kaufman Purcell
Directora, Centro de Política Hemisférica, Universidad de Miami.

Quinta Columna / Política
Publicado en AméricaEconomía
1 de abril, 2006

Las nuevas fronteras

LA APLICACIÓN DE UNA reforma de inmigración ha dominado los titulares estadounidenses recientemente. Entre las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la preocupación de Estados Unidos por la porosa frontera hacia el sur con México ha estado creciendo. Y esto no es porque los estadounidenses creen que los mexicanos sean terroristas, sino porque temen que personas no mexicanas puedan tomar ventaja de lo poco seguro que es el paso y atacar territorio estadounidense. Vinculado a este tema, se estima que 11 millones de personas que viven en Estados Unidos entraron al país de manera ilegal, y el gobierno no sabe quiénes son ni si pueden ser una amenaza para la seguridad de la nación.

No hay consenso en el país del norte sobre qué hacer con la inmigración ilegal. Ni siquiera hay acuerdo en si es un problema, ya que muchos extranjeros que entran clandestinamente a Estados Unidos encuentran fácilmente el tipo de trabajo que no desean los estadounidenses, pagan impuestos y, en la mayoría de los casos, son individuos que trabajan duro porque quieren una vida mejor para sí mismos y sus familias.

La inmigración es básicamente un tema de política interna. En las décadas pasadas, sin embargo, se ha convertido en uno de los temas principales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desde que se estimó que cerca de dos tercios de los 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos son mexicanos. Además, muchos de ellos dependen de los cerca de US\$ 20.000 millones en remesas (cifra que incluso supera la inversión extranjera directa en México) que envían a sus familias. Por razones obvias, el gobierno mexicano no pone énfasis en la dependencia del país de estas remesas. En cambio, ha demostrado preocupación por la vulnerabilidad de los mexicanos de ser abusados por sus empleadores estadounidenses y otros. Para resolver el problema, el gobierno mexicano está haciendo campañas destinadas a conseguir una especie de programa de amnistía que permita a sus ciudadanos legalizar su estado y continuar trabajando en Estados Unidos.

Tanto al presidente Bush como al presidente Fox les gustaría ver normalizado el estatus de los inmigrantes ilegales. Bush promueve una cierta forma de ganarse la ciudadanía. Como muchos estadounidenses, no quiere premiar a quienes entraron ilegalmente a expensas de otros que han seguido las reglas y han esperado un largo tiempo para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, comparte la preocupación de muchos estadounidenses que quieren menos permeabilidad en las fronteras. El compromiso al que aboga el presidente Bush, por lo tanto, incluye el arreglo de las fronteras estadounidenses (aunque no la construcción de muros). Esto también implica un programa de trabajadores invitados que permita a los extranjeros trabajar temporalmente en forma legal en Estados Unidos, y un sistema a través del cual pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses si así lo desean.

A pesar de que toda la atención se ha puesto en la inmigración, sería poco realista pensar que un proyecto de ley sobre el tema se apruebe antes de las elecciones del Congreso en noviembre. El fracaso en la aprobación de un proyecto apoyado por el presidente Bush debilitaría al presidente Fox, aumentaría el sentimiento anti Estados Unidos en México y haría

difícil a los candidatos a la presidencia de ese país estrechar las relaciones con su vecino del norte.

Del otro lado, aun con el compromiso de aprobar una reforma de inmigración, no habría un respiro absoluto para México, cuya población está envejeciendo rápidamente. En alrededor de 25 años, México no tendrá mano de obra suficiente para sustituir a los trabajadores de más edad que hayan dejado la fuerza laboral. La pérdida de México, sin embargo, será una ganancia para Estados Unidos ya que la inmigración estará permitida en este país para suplir la falta de fuerza laboral joven y evitar el envejecimiento de la mano de obra, así como está ocurriendo en otros países industrializados.

Además, mientras más tiempo los mexicanos disfruten de la seguridad de la emigración, más tiempo le tomará a México hacer lo que necesita para aumentar su crecimiento económico y crear más trabajo para sus ciudadanos. Esto implica aprobar reformas laborales y tributarias, romper los monopolios y permitir la entrada de más capital extranjero en el sector energético para asegurar que el país tenga suficiente gas y petróleo, así como precios razonables para ambos, para sustentar el crecimiento de la economía. Finalmente, esto involucra reformas a la educación, para que los mexicanos puedan aprender habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en una economía avanzada.

El destino de los mexicanos en Estados Unidos depende del Congreso estadounidense. El destino de los mexicanos en México, en cambio, depende de su propio gobierno.